

Introducción

El sistema social chileno (tanto en su estructura como en su dinámica organizativa) reposaba antes de 1973 en dos procesos: la operación de un sistema democrático-representativo en progresiva ampliación y un modelo de desarrollo urbano-industrialista sostenido fuertemente por el Estado y que - más allá de sus oscilaciones - incorporaba a sus beneficios a proporciones crecientes de la población. El régimen militar, como se sabe, rompió drásticamente con ambos procesos, desarticulando con ello todo el sistema social.

Los miembros

Los chilenos (especialmente ~~de~~ la voluminosa clase media) históricamente se identificaban fuertemente por su condición de ciudadanos: las tasas de participación electoral, la proporción de militancia política y el grado de organicidad y representatividad de los partidos fueron tradicionalmente elevados. La supresión de la institucionalidad democrática y en especial, la disolución de los partidos decretadas por el régimen militar, ha acarreado por ello, un proceso significativo de desagregación de la sociedad como conjunto. Hay que tener en cuenta además que las propias organizaciones o movimientos sociales (sindicatos, movimientos de pobladores, colegios profesionales, etc.) generalmente tenían como referente de su acción al sistema político, frente al cual presionaban para ganar el favor de la autoridad estatal. El desmantelamiento del sistema representativo, por tanto, condujo al desmantelamiento de ese tipo singular de organización social. Súmese a esto la represión directa que se ejerció sobre los movimientos populares, y los esfuerzos por disgregarlos atomizando sus demandas con la imposición de relaciones mercantiles en terrenos tan sensibles como las relaciones laborales, la previsión, la salud, la vivienda, etc.

Pero la desarticulación de la sociedad chilena tiene manifestaciones que serán probablemente más duraderas que las mencionadas. De partida, la destrucción de la tradicional "cultura de compromiso", esencialmente política, basada en un Estado que parecía trascender a las clases, y que era ideológicamente distribucionista; su reemplazo por una "cultura autoritaria" caracterizada por la exacerbación del comportamiento de los individuos como masa a través de la búsqueda angustiada de la utilidad en los mercados y por su obediencia automática frente a la omnipresente coacción estatal. De otra parte, durante la última década la propia estructura de clases, grupos y estratos sociales experimentó transformaciones radicales que apuntan también hacia la desagregación social.

El "modelo de Chicago" dejó en efecto una estructura social que se caracteriza gruesamente por el debilitamiento de los dos conglomerados en que se sostenía el arreglo democrático chileno: la clase obrera industrial organizada y el empleo público. Inversamente se abultaron las posiciones sociales independientes (comerciantes, empresarios pequeños), por definición inestables y carentes de solidaridad interna. La marginalidad ha alcanzado proporciones abismantes como resultado del desempleo, que no ha bajado en el período de un promedio del 20% de la fuerza de trabajo. La mitad de los jóvenes incorporados al mercado de trabajo se encuentran en condiciones de marginalidad, con la frustración que ella alimenta frente a una sociedad que los excluye. La crisis económica abierta en 1982 y el derrumbe del modelo, han acentuado este proceso de desarticulación. De una parte porque los problemas de la desocupación y la marginalidad se agravan con la crisis; y de otra, porque el fin del "milagro económico" terminó con el acceso fácil al consumo importado; con ello, importantes sectores de las capas medias incorporados a la espiral del consumo moderno, han experimentado la crisis como una amenaza del status conquistado; para los jóvenes se ha evaporado bruscamente un mecanismo simbólico con el que intentaban compensar la exclusión social de que son objeto.

Ver cuadro página siguiente.

DIMENSIONES DEL CAMBIO EN LA ESTRUCTURA SOCIAL CHILENA

	1971	1980	1982
1. INORGANICIDAD:			
Porcentaje de asalariados en la población activa	53	45	38
2. EXCLUSION:			
Porcentaje de "excluidos" (a) en la población activa	14	25	36
3. IMPERMEABILIDAD:			
- Porcentaje de jóvenes (b) activos "incluidos"	80	61	49
- Porcentaje de mujeres activas "incluidas"	68	60	50
- Coeficiente de incorporación de jóvenes a posiciones "formales" (c)		0.05	
- Coeficiente de incorporación de mujeres a posiciones "formales" (c)		0.37	

(a) Desocupados; PEM y POJH; empleo doméstico y trabajadores marginales en comercio y servicios.

(b) Población activa entre 15 y 24 años de edad.

(c) Cociente entre el incremento de población activa joven (femenina) en empleos formales (incluidos) y el incremento de población activa joven (femenina) total en el período.

Como se ve, el cuadro general que presenta la sociedad chilena es extremadamente desfavorable a una concertación democrática. No se ven en ella conglomerados clasistas diferenciados, la mayoría de la población sobrevive en condiciones de masa marginal, no hay pautas ni canales comunes de movilidad social, los movimientos sociales están desarticulados, los grupos e individuos han perdido la identidad que encontraban en la política, en fin, prevalece una cultura individualista dominada por el miedo. El fenómeno de la disolución social se traduce pues en la ausencia de acciones y de movimientos de tipo colectivo, y su reemplazo por una masa anómica (A) centralizada, ya sea por el Estado, ya sea por un liderazgo romántico contestatario de aquél. Y sin actores sociales, ¿quién firmará el contrato democrático que ofrecen los modelos concertacionistas? El problema de la democracia sigue pues abierto con una desesperante intensidad (2).

La tradición sociológica habla de desintegración social toda vez que una sociedad, en el tránsito de un tipo de organización a otra (por ejemplo del tipo tradicional al moderno), experimenta pasajera y momentáneamente situaciones de involución, de ruptura del orden simbólico, de ausencia de normas y debilitamiento de la solidaridad (la anomia aguda, en el sentido de Durkheim). En el caso de Chile, sin embargo, se está ante la presencia de los mismos síntomas, pero no de las mencionadas causas. En efecto, la sociedad chilena no está en tránsito hacia ningún estadio superior de organización: globalmente, en los últimos diez años experimentó un proceso de involución;

- 
- (1) Se ha utilizado el concepto anomia en su sentido sociológico más amplio y difundido; con él se caracteriza una acción colectiva (e individual) marcada por la falta de un referente definido de normas, valores y marcos culturales.
  - (2) Quien imagine que las condiciones actuales de Chile son entonces más favorables para un modelo confrontacional (tipo lucha de clases anti-capitalista) se verá también desengañado. En efecto, el conglomerado llamado a constituir la "alianza social" contra el capital (proletariado industrial, asalariado agrícola, clase media burocrática), en vez de fortalecerse se ha debilitado. En cambio, la escena aparece copada por dos actores que este modelo jamás ha logrado dirigir: los "marginales" (el despreciado lumpen-proletariado) y las clases medias independientes (la despreciada pequeña-burguesía). En este cuadro una confrontación organizada obrero/empresarios por el control del proceso industrializador (como ella llegó a darse en el pasado, excluyendo a otros grupos y conflictos) es inimaginable. Y esto que dándose solamente en una variable estructural, que son por lo demás las que más importan a ese tipo de pensamiento. La estructura social resultante augura más un tipo de lucha social extremadamente violenta y con programas políticos poco estructurados; es fácil pensar en populismos autoritarios (basados en las masas marginales urbanas) o en neofascismos del mismo signo (basados en grupos de la pequeña burguesía deteriorada), más que en programas políticos socialistas estructurados.

lo que da a dichos rasgos un carácter permanente, estructural, no pasajeros ni accidentales: este tipo de fenómeno es lo que se ha llamado aquí disolución social, y a su resultado, un tipo especial de sociedad de masas.

Lo importante es reconocer que, en tales condiciones, el problema de la democracia no puede sino inscribirse dentro de una problemática todavía más comprensiva: la de la (re) integración social. Dicho en otros términos, la democracia en Chile

sólo logrará asentarse si logra proporcionar las bases de integración de la sociedad; lo que diferencia del caso de los países desarrollados, por ejemplo, donde ella descansa en sociedades fuertemente cohesionadas. En nuestro país, por tanto, la democracia no puede ser únicamente representativa; ella debe también ser creativa de los símbolos, solidaridades y normas colectivas que esta sociedad perdió, con la experiencia autoritaria.

Planteadas así las cosas, el problema de la democracia se superpone con el desafío de la integración de sociedad en estado de disolución. Es la inmensa herencia de la dictadura, que se suma a las más evidentes, como una deuda externa insoportable, niveles de desocupación insostenibles, desigualdades sociales explosivas, heridas psico-sociales muy difíciles de tratar, etc.; las cuales se traducirán en fuertes presiones al conflicto, con lo que el círculo vicioso de la disolución social termina por completarse.

Un primer desafío de la democracia será recrear en estas sociedades un sentimiento de Nación, o sea, de identidad social y cultural específica. Para ello es indispensable alcanzar una cierta idea del desarrollo nacional que despierte un consenso relativo con la inclusión de la diversidad de intereses que caracteriza este estado de disolución. Esto conduce al segundo desafío democrático: proponer un esquema de organización y desarrollo del país que reúna un consenso similar al que convocó el arreglo democrático entre 1930 y mediados de los sesenta en Chile.

Tal esquema no puede eludir, primeramente, el rol fundamental que le tocará jugar al Estado. Como ha sido dicho, lo característico de la disolución es la ausencia de actores sociales. En estas condiciones, ¿quién puede reemplazar al Estado como factor de integración nacional y desarrollo? Cualquier formulación rígida favorable a la "sociedad civil", a los "movimientos de base", etc., corre el riesgo en este contexto de caer en un romanticismo que refuerza el fenómeno desintegrativo.

En segundo término, el nuevo arreglo democrático no puede tampoco prescindir de un esfuerzo industrializador basado en la sustitución de importaciones y en la obtención de una cierta autonomía económica nacional. No se trata por cierto de llegar a los extremos del período previo a 1973 en Chile, pero es evidente que la industria es el único sector capaz de erigirse en columna vertebral de la organización económica; aunque se localice en sectores muy definidos donde el país pueda desarrollar ciertas ventajas comparativas. No obstante, como sería iluso imaginar que la industria puede absorber el inmenso desempleo y la heterogeneidad social existente, habrá que pensar en una organización económica diversificada, donde cohabiten con ella des de la producción agrícola de punta para la exportación, a formas de producción alternativas, pasando por una voluminosa <sup>económica</sup> rural y urbana de autosubsistencia, ligada a mercados locales de necesidades básicas. La importancia de las organizaciones económicas populares y las estrategias productivas alternativas se ubican en este terreno, que permitirá dar un horizonte de actividad a las grandes masas pauperizadas (3).

El tercer desafío de la democracia será sin duda levantar instituciones capaces de canalizar el conflicto y de recrear los consensos nacionales básicos. En el caso de Chile ésta es quizás su tarea más difícil. Supone primeramente organizar un Estado democrático que repose en un amplio apoyo social. Esto exige de un pacto civil (esto es, que incluya a los principales partidos de izquierda, centro y derecha, así como a la inmensa mayoría de las organizaciones sociales) que respalde su fundación y que obligue a

- 
- ( ) El debate acerca del futuro económico democrático y del desarrollo nacional se ha desplazado radicalmente en los últimos diez años. Antes se planteaba básicamente en torno a las formas de propiedad; durante la Unidad Popular el debate se centró en torno al carácter estatal, mixto, cooperativo o privado de los medios de producción. Hoy día el tema se centra en el carácter de los propios medios de producción, su orientación, su destino y función en la sociedad y el desarrollo. En ese marco se plantea el problema de la propiedad, como uno más y no siempre, necesariamente, el más importante. Nosotros asumimos una posición intermedia entre quienes postulan la reindustrialización moderna y quienes sostienen una línea de producción y organización económica alternativista (tecnologías apropiadas, organizaciones económicas populares, autogestión, pequeña escala, etc.). Pensamos que una política económica democrática debería estar guiada por el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población. Para ello se requerirá de sectores de punta (tecnología moderna), productores de divisas, de sectores industriales productores de bienes básicos y de una gran trama de pequeña industria, artesanado y talleres de subsistencia. El trabajo que hoy día se realiza en este sector es de gran importancia, ya que se puede prever que será uno de los pilares centrales de un reordenamiento económico democrático, y puede significar una de las diferencias más grandes con el proceso de industrialización ocurrido a partir de los años treinta. Un Estado democrático fomentador de esta red económica alternativa, puede encontrar en ese proceso un eje de equilibrio importante.

las FF.AA. a respetarlo. La institucionalidad democrática implica, en segundo lugar, una flexibilización del sistema de partidos de modo que opere un sistema de coaliciones de gobierno a la vez mayoritarias y alternativas; lo que supone en particular una diversificación del centro político chileno.